

**1 HECHOS****5**

**1.1 EL DÍA 27 DE MARZO DE 2019 EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU, EN RAZÓN A LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA PARCIAL, SOBRE UNA ZONA DE TERRENO DE 3330.81 M2, CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 50S- 40279765, PROFIRIÓ PARA EL PAGO LA RESOLUCIÓN 1246 DEL 2019, RAD: 20193250012466, RT. 46881,5**

**1.2 LA RESOLUCIÓN ORDENÓ EL PAGO DE LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, MENOS LOS DESCUENTOS QUE POR LEY SE DEBIERAN REALIZAR; ORDENÓ QUE ENVIARAN EL DINERO; EN PRIMERA INSTANCIA ENVIÓ EL TÍTULO JUDICIAL A ÓRDENES DEL JUZGADO 12 C. DEL CTO, A FIN DE DAR TRÁMITE FINANCIERO A UNA DEMANDA INSCRITA DE VISOCOL CONTRA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA BCP LTDA. EN LIQUIDACIÓN, ESTO, DESDE EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2002, Y QUE SI NO ERA COBRADO DIEZ DÍAS DESPUÉS, EL JUZGADO LO DEBERÍA REGRESAR A LA ENTIDAD BANCARIA. (ART. 3º DE LA RESOLUCIÓN). EL DÍA 13 DE ENERO DE 2021, EL JUZGADO 12 C. DEL CTO, ORDENÓ CONVERTIR TODO EL DINERO AL BANCO AGRARIO, POR CUANTO INVERSORA Y PROMOTORA GERONA NO ERA PARTE ALGUNA EL PROCESO REFERIDO.**

**6**

**1.3 EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, LA EMPRESA BENEFICIARIA DEL TÍTULO, AQUÍ ACCIONANTE, A TRAVÉS DE SU APODERADA SE REMITIÓ AL BANCO AGRARIO CON EL FIN DE QUE ÉSTE REALIZARA EL DESEMBOLSO, EL BANCO LE INFORMÓ QUE EL TÍTULO YA HABÍA SIDO PAGADO A UN SUJETO LLAMADO VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO C.C. 4.318.158. QUE HABÍA SIDO PAGADO POR ORDEN DEL IDU. PRESENTAMOS EL RECLAMO EN EL IDU, EL MISMO DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. RADICADO Nº 20215261582152.**

**6**

**1.4 EL DÍA, 13 DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTAMOS UN NUEVO DERECHO DE PETICIÓN A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL IDU DOCTOR DIEGO SÁNCHEZ FONSECA. SOLICITANDO EL PAGO.**

**6**

**1.5 EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021, MARÍA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS, EN ASOCIO CON MARCELA ZULUAGA FRANCO, DIO CONTESTACIÓN A LOS DOS DERECHOS DE PETICIÓN CON UNA ABSURDA JUSTIFICACIÓN Y PROFIRIÓ QUE EL DINERO LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, PRESUNTO DELINCUENTE.**

**6**

**1.6 JUSTIFICARON EL PAGO CON UNA SUPUESTA ACTA DE CONCILIACIÓN FIRMADA EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMIENTO SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA “FUNDACIÓN DERECHO Y EQUIDAD”, EL ACTA APARECE FIRMADA ENTRE EL SEÑOR VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, Y EL DOCTOR CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, SUPUESTAMENTE APODERADO DE INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, POR PODER OTORGADO POR EL SEÑOR MIGUEL ARANGO DE FEX, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA. EN MANERA ALGUNA EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZÓ EL HECHO, NI MIEMBRO ALGUNO DE LA COMPAÑÍA FIRMÓ TAL PODER, NI CONOCEMOS AL SUJETO.**

**7**

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

<b>1.7</b>	<b>LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE ANEXÓ LA FUNCIONARIA FUERON: UNA FOTOCOPIA DEL ACTA DE CONCILIACIÓN SIN ANEXO ALGUNO Y COPIA DE UN MEMORANDO EN EL QUE MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS IDU, ORDENÓ A DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO, SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO, IDU, HACER EL CHEQUE A NOMBRE DE VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, POR CUANTO UNA MUJER LLAMADA DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN, LO SOLICITÓ.</b>	<b>7</b>
<b>1.8</b>	<b>EL IDU EJERCIÓ INSTRUCCIÓN, AL HACER EFECTIVO EL PAGO CON LA MERA PRESENTACIÓN DEL “ACTA VIRTUAL DE CONCILIACIÓN”, OMITIÓ ATENDER LA LEY QUE REGULA LOS EFECTOS DEL ACUERDO CONCILIATORIO, CUYA ACTA ÚNICAMENTE PRESTA MÉRITO EJECUTIVO. (ARTÍCULO 66 LEY 446 DE 1998). Y BIEN ES SABIDO QUE UN PROCESO EJECUTIVO SE ADELANTA EN JURISDICCIÓN CIVIL, ANTE UN JUEZ Y NO ES UN DOCUMENTO INTERCAMBIABLE ANTE UNA PAGADOR.</b>	<b>7</b>
<b>1.9</b>	<b>EL IDU OMITIÓ EL DEBER DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO A LA BENEFICIARIA POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>7</b>
<b>1.10</b>	<b>LOS HECHOS PRESENTADOS MUESTRAN LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA</b>	<b>13</b>
<b>1.11</b>	<b>INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, NO RECIBIÓ DE PARTE DEL IDU, DE MANERA ÍNTEGRA, LA DOCUMENTAL QUE DEBE CONTENER UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>13</b>

## **2 FUNDAMENTOS DE DERECHO** **14**

<b>2.1</b>	<b>ARTÍCULO 86 DE LA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1991</b>	<b>14</b>
<b>2.2</b>	<b>DECRETO 2591 DE 1991, LEY 1755 DE 2015</b>	<b>14</b>
<b>2.3</b>	<b>EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ES GARANTÍA MÍNIMA DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ART. 29 CN.</b>	<b>14</b>
<b>2.4</b>	<b>SENTENCIA T-206/18. ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO DE PETICIÓN-PROCEDENCIA DE MANERA DIRECTA POR SER DERECHO FUNDAMENTAL DE APLICACIÓN INMEDIATA</b>	<b>14</b>

## **3 PRUEBAS Y ANEXOS** **15**

<b>3.1</b>	<b>EL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA SUSCRITA APODERADA QUE DA CUENTA DE LOS HECHOS VIOLADORES AL DEBIDO PROCESO POR VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. ANEXO EXPEDIENTE CON 267 FOLIOS.</b>	<b>15</b>
<b>3.2</b>	<b>LAS DECLARACIONES DE LAS FUNCIONARIAS ROSITA ESTHER BARRIOS, MARIA DEL PILAR HURTADO GRAJALES, DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO RESPONSABLES Y REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD, REALIZADAS A TRAVÉS DE SUS PROPIOS ESCRITOS. (FOLIOS, 194, 221-222, DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA APODERADA ACCIONANTE)</b>	<b>15</b>

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

**3.3 LAS SENDAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA SUSCRITA APODERADA ACCIONANTE (FOLIOS, 137, 230 245 DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA APODERADA ACCIONANTE).** 15

**3.4 DECLARACIÓN JURAMENTADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ACCIONANTE, QUIENES DECLARAN QUE NO TIENEN CONOCIMIENTO DE LAS JUSTIFICACIONES QUE ENTREGARON LAS FUNCIONARIAS PARA ENTREGAR A UN PRESUNTO DELINCUENTE LA TOTALIDAD DEL DINERO ORDENADO POR LA RESOLUCIÓN : 1246 DEL 27 DE MARZO DE 2019 RAD. 20193250012466 RT. 46881 A (FOLIOS, 196-197 DEL EXPEDIENTE ELABORADO POR LA APODERADA ACCIONANTE).** 15

#### **4 ANEXOS** 16

**4.1 EL PRESENTE ESCRITO DE TUTELA** 16

**4.2 PODER GENERAL INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN CON VIGENCIA** 16

#### **5 SOLICITUDES** 16

**5.1 ORDENAR AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, QUE A TRAVÉS, DE SU DIRECTOR DIEGO SÁNCHEZ FONSECA, REALICE TODAS LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS Y ENTREGUE DE MANERA INMEDIATA A LA ACCIONANTE, LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN EL IDU, RESPECTO A LA EXPROPIACIÓN DE UNA PARTE DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA No.50S-40279765, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 830.026.001-1, QUE CULMINÓ CON LA RESOLUCIÓN 1246 DEL 27 DE MARZO DE 2019.** 16

**5.2 ORDENAR AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, QUE SE ABSTENGA DE AHORA EN ADELANTE REINCIDIR EN LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA DE LA SOCIEDAD INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN.** 16

#### **6 NOTIFICACIONES** 16

**6.1 AL ACCIONADO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU** 16

**6.2 LA SUSCRITA RECIBE NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL CORREO ELECTRÓNICO TELEALDIA777@GMAIL.COM ATENTAMENTE,** 17

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

# ACCIÓN DE TUTELA POR, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

Señor

JUEZ MUNICIPAL (REPARTO)

E. S. D.

**Acción de tutela:** por VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

**Accionado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, establecimiento público de orden distrital con NIT: 899.999.081-6

**Director:** DIEGO SÁNCHEZ FONSECA

**Funcionarios** presuntamente vulneradores del derecho fundamental al debido proceso por faltar al principio de publicidad

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

Nombre	IDENTIFICACIÓN	UBICACIÓN
Diego Sánchez Fonseca Director IDU	C.C. 79.237.267	atnciudadano@idu.gov.co/ correspondencia@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Director
María Del Pilar Grajales Restrepo Directora Técnica de Predios IDU	C.C. N.º 51.700.138	maria.grajales@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirección técnica de predios
ROSITA ESTHER BARRIOS ESTRADA	C.C. N.º C.C. 32.040.987	rosita.barrios@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirectora General

**Accionante:** INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, NIT. 830.026.001-1.

**Apoderada:** DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA C.C. 40.916.910 Tp. 280612 C.S. de la J.

Respetado señor juez de amparo:

Diana Cristina Ruiz Ariza, identificada con Cedula de ciudadanía No. 40.916.910, actuando a nombre y en representación de la compañía INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, NIT. 830.026.001-1., tal como consta en el poder general otorgado notaria 73 del círculo de Bogotá D.C número 4584 del 10 de septiembre de 2021, residente en la ciudad de Bogotá D.C, por medio del presente documento presento ante usted acción de tutela contra INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, establecimiento público de orden distrital con con NIT: 899.999.081-6, para que suspenda los actos perturbadores del derecho de mi poderdante a POR, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA, que está siendo desconocido de acuerdo con los siguientes

## 1 HECHOS

1.1 El día 27 de marzo de 2019 el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en razón a la expropiación por vía administrativa parcial, sobre una zona de terreno de

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

3330.81 m2, con matrícula inmobiliaria 50S- 40279765, profirió para el pago la resolución 1246 del 2019, rad: 20193250012466, RT. 46881,

- 1.2 La resolución ordenó el pago de la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, menos los descuentos que por ley se debieran realizar; ordenó que enviaran el dinero; en primera instancia envió el título judicial a órdenes del juzgado 12 C. del Cto, a fin de dar trámite financiero a una demanda inscrita de Visocol contra Constructora y Promotora BCP Ltda. en Liquidación, esto, desde el 15 de marzo del año 2002, y que si no era cobrado diez días después, el juzgado lo debería regresar a la entidad bancaria. (Art. 3º de la resolución). El día 13 de enero de 2021, el juzgado 12 C. del Cto, ordenó convertir todo el dinero al Banco Agrario, por cuanto INVERSORA Y PROMOTORA GERONA no era parte alguna el proceso referido.
- 1.3 El día 24 de septiembre de 2021, la empresa beneficiaria del título, aquí accionante, a través de su apoderada se remitió al Banco Agrario con el fin de que éste realizara el desembolso, el banco le informó que el título ya había sido pagado a un sujeto llamado VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO C.C. 4.318.158. Que había sido pagado por orden del IDU. Presentamos el reclamo en el IDU, el mismo día 24 de septiembre de 2021. Radicado N° 20215261582152.
- 1.4 El día, 13 de octubre de 2021, presentamos un nuevo derecho de petición a nombre del director del IDU doctor Diego Sánchez Fonseca. Solicitando el pago.
- 1.5 El día 28 de octubre de 2021, María Del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios, en asocio con Marcela Zuluaga Franco, dio contestación a los dos derechos de petición con una absurda justificación y profirió que el

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

dinero le fue entregado al señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, presunto delincuente.

- 1.6 Justificaron el pago con una supuesta acta de conciliación firmada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral de la “Fundación Derecho y Equidad”, el acta aparece firmada entre el señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, y el doctor CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, supuestamente apoderado de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, por poder otorgado por el señor MIGUEL ARANGO DE FEX, representante legal de la compañía. En manera alguna el representante legal realizó el hecho, ni miembro alguno de la compañía firmó tal poder, ni conocemos al sujeto.
- 1.7 Los únicos documentos que anexó la funcionaria fueron: una fotocopia del acta de conciliación sin anexo alguno y copia de un memorando en el que MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, Directora Técnica de Predios IDU, ordenó a DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO, Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo, IDU, hacer el cheque a nombre de VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, por cuanto una mujer llamada DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN, lo solicitó.
- 1.8 El IDU ejerció instrucción, al hacer efectivo el pago con la mera presentación del “Acta Virtual de Conciliación”, omitió atender la ley que regula los efectos del acuerdo conciliatorio, cuya acta únicamente presta mérito ejecutivo. (Artículo 66 Ley 446 de 1998). Y bien es sabido que un proceso ejecutivo se adelanta en jurisdicción civil, ante un juez y no es un documento intercambiable ante una pagador.
- 1.9 EL IDU OMITIÓ EL DEBER DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL PROCESO A LA BENEFICIARIA POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

El IDU en manera alguna atendió las insistentes solicitudes de entregar INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A – EN LIQUIDACIÓN, N.I.T. 800.207.579-4 propietaria del título judicial, el expediente completo del proceso de la EXPROPIACIÓN del inmueble

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

registrado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S 40279765 asunto que nos ocupa. A pesar que se lo solicitamos desde el día 13 de octubre de 2021.

#### 1.9.1 DE MANERA VERBAL EN LAS INSTALACIONES DEL IDU SE EXCUSARON PORQUE SEGÚN LA FUNCIONARIA EL PROCESO YA ESTABA ARCHIVADO

Desde octubre 13 de 2021 (En una reunión en las instalaciones del IDU con una funcionaria quien al parecer se llamaba MARCELA ZULUAGA, le realizamos la solicitud de todas las copias del proceso de expropiación del inmueble (Folio 137 del expediente elaborado por la accionante)

El día 13 de octubre ante nuestra inconformidad, exigimos nos atendiera personalmente la encargada de tesorería, finalmente nos atendió Marcela Zuluaga Franco, Abogada. Quien de manera burlesca nos dijo que el proceso estaba archivado, y se llevarían otros quince días para poderlo desarchivar, que ya el juzgado había decidido sobre el dinero, y que debíamos iniciar un proceso administrativo.

#### 1.9.2 LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS, CONSIDERÓ PETICIONES OSCURAS Y REITERATIVAS EL QUE SOLICITÁRAMOS EL CONSTITUCIONAL PAGO Y ADEMÁS OMITIÓ EL ENTREGAR EL ARCHIVO COMPLETO DEL PROCESO

#### 1.9.3 El día febrero 14 de 2022 SOLICITAMOS EL EXPEDIENTE a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO (Folio 245 del expediente elaborado por la accionante)

**3.2. No aceptamos mas vulneraciones a la ley de transparencia solicitamos inmediata entrega de toda la información que repose en los archivos del IDU respecto a la expropiación de la Resolución No 1246 del 27 de marzo de 2019 RT. 46881 A. Solicitudes realizadas desde octubre 14 de 2021.**

#### 1.9.4 EL IDU VIOLÓ LA LEY DE TRANSPARENCIA Y CON MANIOBRAS PRESUNTAMENTE BUSCA TENER SENTENCIAS A SU FAVOR

Presentamos sendas denuncias ante los entes disciplinarios, de control y ante la Fiscalía General de la Nación. Desde el inicio avisamos a las directivas del IDU para que se hicieran

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.



parte en los procesos y colaboraran en la investigación. Como represalia recibimos amenazas que buscaron silenciarnos para impedirnos el exigir, primeramente el dinero que no nos ha pagado la entidad y segundo la documentación completa del proceso, como consta en los largos escritos colmados de irregularidades, los cuales debemos atacar con nulidades, recursos etc. (Fols 182, 233-234 del proceso construido por la suscrita apoderada accionante.)

El IDU flagrantemente violó la ley de transparencia

*“La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional es la herramienta normativa que regula el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública en Colombia. Tiene como objetivo que la información en posesión, custodia o bajo control de cualquier entidad pública, órgano y organismo del Estado colombiano, persona natural o jurídica de derecho privado que ejerza función pública delegada, reciba o administre recursos de naturaleza u origen público o preste un servicio público, esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles.”<sup>i</sup>*

ABC de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional

#### 1.9.5 LA DOCUMENTAL DEL PROCESO QUE POR LEY DEBE REPOSAR EN EL IDU JAMÁS NOS LO ENTREGÓ

Los mas de doscientos folios del expediente que nosotros armamos, constituyen un documento colmado de meras justificaciones del IDU y amenazas, lo elaboramos para nuestra defensa, pero no se pueden encontrar los documentos que debe tener obligatoriamente entregar las directivas del IDU.

Como es el orden legal , una expropiación por interés público requiere el cumplimiento de ciertos procedimientos, además si se llega a una resolución de expropiación por vía administrativa, la entidad deberá seguir múltiples pasos ( LEY 388 DE 1997), también deberá soportar todo el procedimiento para el pago de los dineros, todas y cada una de las comunicaciones internas y externas, verificaciones, memorandos, transacciones, recibos de pago, copias de cheques, los anexos del acta de conciliación etc.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso . sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

1.9.6 LOS ÚNICOS DOCUMENTOS O PAPELES RECIBIDOS, POR PARTE DE LAS DIRECTIVAS DEL IDU, SON LOS QUE JUSTIFICAN LAS MANIOBRAS REALIZADAS POR PRESUNTOS DELINCUENTES PARA QUE LA DIRECTORA DE PREDIOS ORDENARA A LA TESORERA DEL IDU HACER UN CHEQUE A VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO

De todos los documentos que deben reposar en el IDU, no hemos recibido, sino la copia de la resolución, que ya la habíamos encontrado en una página web, la presunta constancia de ejecutoria, la fraudulenta acta de conciliación sin anexos, el memorando en el que una presunta delincuente DORYS EUGENIA ÁLVAREZ GARZÓN le solicita a MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO que le elaboren un cheque a nombre de VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO, unas verificaciones de firmas de poderes que no concuerdan con lo que quieren verificar, esto en la notaría 7ª de Bogotá, con prehistóricos sellos de caucho, sin la biometría exigida, firmas falsas del representante legal de la empresa sobre papel borroso. Sin embargo no se registró ni una sola llamada al representante legal de la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A, EN LIQUIDACIÓN, para verificar si el IDU podía entregar los **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, a una presunta red delincuencia.

Pero todo el cumulo de documentos que, insistimos debe soportar el proceso, no nos los entregó el IDU.

1.9.1 TAMBIÉN HAY UN FALTANTE DE DINERO DEL QUE EL IDU JAMÁS ENTREGÓ JUSTIFICACIÓN, ESCONDE LA DOCUMENTAL

Tampoco entregó el IDU, los documentos que justifiquen lo qué sucedió con la diferencia del dinero ordenado en la expropiación: **dos mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos (\$2.443.648.757) moneda corriente** y el dinero que envió al juzgado 12 C. del Cto., suma de **dos mil trescientos sesenta y un millones trescientos ochenta y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos (\$2.361.383.374,00) moneda corriente**, que debía ser entregado a la compañía sub judice; o sea, también hace falta la documentación que justifique en qué se gastaron los **ochenta y dos millones, doscientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos (\$82.265.383) moneda corriente**.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 1.9.2 MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO DE MANERA GROSER Y DILATORIA EVADIÓ ENTREGAR LA DOCUMENTAL SOLICITADA Y DICE QUE YA RESPONDIÓ LA SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS.

La funcionaria MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO, de manera grosera, el día 25 de marzo de 2022 envió un escrito a la suscrita apoderada de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA SA EN LIQUIDACIÓN, en el cual tergiversa y diluye la solicitud de la accionante y únicamente entrega la copia de la resolución y otra hoja según afirma ser la constancia de ejecutoria.

Lo anterior simplemente confirma una vulneración al debido proceso, al principio de publicidad, el IDU de manera arbitraria retiene toda la documental del proceso que adelanto el IDU para expropiar el lote inmobiliaria y ordenar pago del precio de la indemnización, por la expropiación de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1.

**Con relación al punto 3.2:** Se hace saber que en ningún momento esta entidad ha vulnerado la ley de transparencia, y en atención a que está solicitando la resolución de expropiación para el RT. 46881; con toda atención se adjunta Resolución de expropiación No.1246 de fecha 27/03/2019 Junto con la constancia de ejecutoria.

- 1.9.3 A LA SUBDIRECTORA DEL IDU, ROSITA ESTHER BARRIOS, TAMBIÉN LE SOLICITAMOS LA TOTALIDAD DEL PROCESO DESDE EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y NO DIO RESPUESTA ALGUNA (folio de 230 del expediente elaborado por la accionante)

**2.3.** No aceptamos mas vulneraciones a la ley de transparencia, exigimos inmediata entrega de toda la información que repose en los archivos del IDU respecto a la expropiación de la Resolución No 1246 del 27 de marzo de 2019 RT.46881 A. Solicitudes realizadas desde octubre 14 de 2021.

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 1.9.4 La funcionaria ROSITA ESTHER BARRIOS, subdirectora del IDU, ignoró la solicitud no dio respuesta alguna a la solicitud, a la fecha, y desde febrero 14 de 2022 la funcionaria no dio respuesta alguna al derecho de petición que incoamos.

Cabe anotar que la referida funcionaria, el día 25 de enero de 2022, entregó únicamente el ilegible poder que nunca firmó el representante legal MIGUEL ARANGO DE FEX al abogado CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, acompañó a este papel una verificación manipulada: un correo a la notaría 7ª de Bogotá con un pdf adjunto, era de otro poder no del aquí referido. Una copia de la cámara de comercio de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, y después, el día 28 de enero de 2022, de manera mentirosa afirmó que entregó una solicitud de verificación a la notaría 4ª de Bogotá.

- 1.9.5 MIGUEL ARANGO DE FEX, declaró bajo juramento que no conoce al abogado CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ, que jamás firmó el poder que presentó el IDU y que la firma del poder entregado por el IDU no es suya. FOLIOS (fols. 201-204 del expediente elaborado por la apoderada accionante).
- 1.9.6 Documentos entregados por la funcionaria ROSITA ESTHER BARRIOS ESTRADA, el día 25 de enero de 2022. (fol. 194 del expediente elaborado por la apoderada accionante)

1. Copia del acta de conciliación efectuada en el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral- Acta de Conciliación Virtual de fecha 27 de octubre de 2020.
2. Copia del Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con código de verificación 121029539DCFBD de fecha 19 de marzo de 2021
3. Copia del poder especial otorgado al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, presuntamente por el señor MIGUEL GERMÁN ARANGO DE FEX
4. Copia del correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2021 remitido por la señora YOLEI ARIAS, jefe de la sección de autenticaciones informa que los sellos y firmas del poder otorgado al señor CARLOS ADNER VIVEROS DÍAZ, corresponden a la notaría

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

- 1.9.7 La accionante manifestó al IDU, bajo juramento que desconocía todo el asunto de la conciliación, el tema fue ignorado y aun así la autoridad no se dignó a entregar las copias del expediente de manera íntegra (fols. 196-197 del expediente elaborado por la apoderada accionante)

Reza la declaración juramentada

1. Que no conocemos y nunca otorgamos poder alguno al doctor CARLOS ADNER VIVEROS DIAZ C.C. 79.458.607 para que conciliara a nombre de la empresa que represento deuda alguna con persona alguna.
2. Que no es cierto que la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN S.A. Nit 830.026.001-1, tuviera deuda alguna con el señor VÍCTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO identificado con cedula de ciudadanía 4.318.158.
3. Que jamás fuimos notificados por el centro de conciliación denominado CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMIENTO, SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA FUNDACIÓN "DERECHO Y EQUITAD", para asistir a conciliación alguna con persona alguna.
4. Que a la fecha jamás recibimos dinero alguno, de la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN S.A. Nit 830.026.001-1, proveniente del pago del IDU, por expropiación administrativa resolución 1246 de 27/03/2019, ni por la indemnización alguna de dicha expropiación.
5. Que el dinero correspondiente a los pagos referidos en el numeral anterior por valor de de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) MONEDA CORRIENTE, menos gastos descontados, de los cuales la entidad no ha presentado justificación alguna, quedaron

## 1.10 LOS HECHOS PRESENTADOS MUESTRAN LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

Resumen: el IDU, a través de sus funcionarias directivas, de manera dilatoria, entregó documentos que no corresponden a la totalidad del expediente, son meras maniobras presuntamente, para justificar la entrega a una presunta red delincriminal y no los documentos reales que legalmente deben reposar en el expediente.

## 1.11 INVERSORA Y PROMOTORA GERONA EN LIQUIDACIÓN, no recibió de parte del IDU, de manera íntegra, la documental que debe contener un proceso de expropiación administrativa

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

Documentos que registren un debido proceso hasta el pago ordenado en la resolución ley 388 de 1997, y que deben existir en los manuales de tesorería para la custodia, entrega y desembolso de los recursos previendo el riesgo (o los requeridos en normas, decretos, circulares). Tal como lo ordena la Constitución Nacional, art. 29 con el debido proceso. (Consejo de Estado, Sección Quinta en Descongestión, Sentencia 25000232400020080008901, May. 31/18.)

## 2 FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1 Artículo 86 de la Carta Constitucional de 1991

2.2 Decreto 2591 de 1991, Ley 1755 de 2015

2.3 El principio de publicidad es garantía mínima del derecho fundamental al debido proceso art. 29 CN.

Sentencia C-641 de 2002 Corte Constitucional. El principio de publicidad constituye una garantía mínima del debido proceso.

Los hechos presentados constituyen una violación al derecho fundamental la información, al debido proceso, y defensa a la empresa INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN. En razón a que a sus socios, representante legal y a la suscrita apoderada, se les impide acceder a la documentación que debe contener toda la información respecto a la expropiación por vía administrativa referida.

*“Predica, el artículo 29 de la Constitución Política determina que el principio de publicidad constituye una garantía mínima del debido proceso en las actuaciones públicas y, especialmente, en las judiciales, cuando categóricamente afirma que toda persona tiene derecho a “un debido proceso público”.*

2.4 Sentencia T-206/18. Acción de tutela en materia de derecho de petición-procedencia de manera directa por ser derecho fundamental de aplicación inmediata

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

Reza la sentencia T-206/18

*“Este Tribunal ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos constitucionales”. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”.*

### 3 PRUEBAS Y ANEXOS

Solicito señor juez, se decreten, practiquen y tengan como pruebas las siguientes arts. 164 s.s. a fin de que sean valoradas para conceder el amparo solicitado.

- 3.1 El expediente elaborado por la suscrita apoderada que da cuenta de los hechos violadores al debido proceso por vulneración al principio de publicidad. Anexo expediente con 267 folios.
- 3.2 LAS DECLARACIONES de las funcionarias ROSITA ESTHER BARRIOS, MARIA DEL PILAR HURTADO GRAJALES, DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo responsables y representantes de la entidad, realizadas a través de sus propios escritos. (Folios, 194, 221-222, del expediente elaborado por la apoderada accionante)
- 3.3 LAS SENDAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA SUSCRITA APODERADA ACCIONANTE (FOLIOS, 137, 230 245 del expediente elaborado por la apoderada accionante).
- 3.4 DECLARACIÓN JURAMENTADA ante notario público de los representantes de la empresa accionante, quienes declaran que no tienen conocimiento de las justificaciones que entregaron las funcionarias para entregar a un presunto delincuente la totalidad del dinero ordenado por la RESOLUCIÓN : 1246 del 27

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.

de marzo de 2019 RAD. 20193250012466 RT. 46881 A (FOLIOS, 196-197 del expediente elaborado por la apoderada accionante).

#### 4 Anexos

4.1 El presente escrito de Tutela

4.2 Poder general INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN CON VIGENCIA

#### 5 SOLICITUDES

Por las razones de hecho y de derecho, solicitamos al honorable juez de amparo se sirva conceder el amparo implorado:

POR, VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA

5.1 Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que a través, de su director Diego Sánchez Fonseca, realice todas las acciones que sean necesarias y entregue de manera inmediata a la accionante, la totalidad de la documentación que reposa en el IDU, respecto a la EXPROPIACIÓN de una parte del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.50S-40279765, en favor de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT 830.026.001-1, que culminó con la resolución 1246 del 27 de marzo de 2019.

5.2 Ordenar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, que se abstenga de ahora en adelante reincidir en **la violación al debido proceso, perturbación a la publicidad, y defensa** de la sociedad INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. – EN LIQUIDACIÓN.

#### 6 NOTIFICACIONES

6.1 Al accionado INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

notificacionesjudiciales@idu.gov.co

Las pruebas presentadas lo son de hechos acontecidos y valoradas por jueces de la república, por hechos notorios, y de testigos oculares bajo la gravedad de juramento o firmadas por los mismos vulneradores. Es de aclarar que presentamos los hechos por los que consideramos violado el debido proceso. Sin embargo, respetuosamente, dejamos constancia que no estamos tipificando ni acusando formalmente a los referidos, ya que tanto la Procuraduría General de la Nación o a quien designe, la Contraloría General de la Nación, o a quien corresponda, como la Fiscalía General de la Nación son los órganos constitucionalmente llamados a realizar dichas declaraciones disciplinarias y penales, después de adelantar las investigaciones que considere convenientes, de conformidad con los artículos 277 y 249-251 Cp.



A los funcionarios implicados en la VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, PERTURBACIÓN A LA PUBLICIDAD, Y DEFENSA: Nombre	IDENTIFICACIÓN	UBICACIÓN
Diego Sánchez Fonseca Director IDU	C.C. 79.237.267	atnciudadano@idu.gov.co/ correspondencia@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Director
María Del Pilar Grajales Restrepo Directora Técnica de Predios IDU	C.C. N.º 51.700.138	maria.grajales@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirección técnica de predios
ROSITA ESTHER BARRIOS ESTRADA	C.C. N.º C.C. 32.040.987	rosita.barrios@idu.gov.co Cl. 22 #627, Bogotá Tel:(601) 3386660 Subdirectora General

6.2 La suscrita recibe notificaciones personales en el correo electrónico [Telealdia777@gmail.com](mailto:Telealdia777@gmail.com) Atentamente,



DIANA CRISTINA RUIZ ARIZA  
APODERADA ACCIONANTE  
TP. 280612 C.S. de la J.  
Celular 3002730056

---

<sup>i</sup> Abc de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional